

Informe Anual sobre la Trata de Personas 2017
HONDURAS (NIVEL 2)

El Gobierno de Honduras no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos cada vez mayores en comparación con el informe del periodo anterior; Por lo tanto, Honduras se mantuvo en el nivel 2. El gobierno demostró esfuerzos cada vez mayores al procesar a un mayor número de presuntos tratantes; identificando, refiriendo y ayudando a más víctimas de trata sexual; aprobando un Plan de Acción Nacional para 2016-2022; la promulgación de reglamentos de aplicación de su ley contra la trata; y aprobando un presupuesto para la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT). Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. No hubo enjuiciamientos por reclutamiento de niños para actividades delictivas forzadas o de funcionarios cómplices de la trata. Había pocos servicios disponibles para las víctimas adultas, y los servicios para las víctimas identificadas fuera de la capital eran aún más limitados. La falta de programas de protección de testigos desalentó a las víctimas de cooperar en el proceso de justicia penal y las dejó vulnerables al reingreso en la trata.

RECOMENDACIONES PARA HONDURAS

Incrementar los esfuerzos para enjuiciar los delitos de trata y condenar y sentenciar a los tratantes, en particular por los delitos relacionados con el trabajo forzoso y la actividad criminal forzada de los niños; incrementar los esfuerzos para procesar y condenar a los funcionarios públicos por complicidad en los delitos de trata; aumentar la identificación y asistencia de víctimas adultas, víctimas de trabajo forzoso y niños forzados a cometer crímenes, incluso entre hondureños repatriados y otras poblaciones particularmente vulnerables; fortalecer la existencia o desarrollar y aplicar nuevos mecanismos de remisión de víctimas y proporcionar servicios especializados y refugio a todas las víctimas, incluso mediante un aumento del financiamiento gubernamental a las organizaciones de la sociedad civil; enmendar la ley contra la trata para incluir una definición de trata de personas compatible con el derecho internacional; aplicar el Plan de Acción Nacional para 2016-2022; aplicar leyes que castiguen a los intermediarios por prácticas ilegales que faciliten la trata, como ofertas fraudulentas de empleo o pagos ilegales por migración o colocación laboral; y continuar capacitando y asignando recursos adecuados a la policía dedicada a la lucha contra la trata y a las unidades fiscales, así como al personal del equipo de "respuesta inmediata".

ENJUICIAMIENTO

El gobierno mantuvo los esfuerzos de aplicación de la ley. La ley contra la trata de Honduras de 2012 prohíbe todas las formas de trata, prescribiendo penas de entre 10 y 15 años de prisión; estas sanciones son suficientemente estrictas y proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Sin embargo, en contraste con la definición internacional, la ley establece el uso de la fuerza, el engaño o la intimidación como factores agravantes más que como elementos esenciales del crimen y define la adopción ilegal sin el propósito de la explotación, como forma de trata humana. El gobierno publicó los reglamentos que aplicaban la ley en enero de 2017, que proporcionaban orientación sobre

cómo hacer cumplir adecuadamente los mandatos de CICESCT. La CICESCT, con fondos y asistencia de un gobierno extranjero, evaluó la ley de 2012 y emitió una serie de recomendaciones, incluyendo la modificación de la ley para incluir los medios de fuerza, el engaño o la intimidación como elementos esenciales del crimen; mejorar la asistencia a las víctimas mediante la indemnización a las víctimas; y proporcionar recursos financieros, logísticos y técnicos adicionales para la provisión de servicios.

El gobierno informó de la investigación de al menos 41 casos de sospecha de trata, e inició el enjuiciamiento de 41 sospechosos en 11 casos de trata sexual. Se condenó a nueve tratantes en ocho casos, incluido un caso de trabajo forzoso, en comparación con el inicio de enjuiciamiento de 24 sospechosos en nueve casos y 13 condenas en el período de informe anterior. En 2016, los delincuentes condenados fueron multados y recibieron penas de entre seis y 15 años de prisión, en comparación con entre 10 y 15 años de prisión en 2015. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que los tratantes eran a menudo procesados por delitos menores con penas menores, como el proxenetismo. La impunidad generalizada de todos los delitos, incluida la trata de personas y la corrupción, sigue siendo un reto. Si bien el gobierno condenó a dos funcionarios cómplices en 2015, no informó de enjuiciamientos o condenas de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata de personas en 2016. Las autoridades investigaron varios casos en los que una pandilla parecía obligar a las víctimas a participar en actividades delictivas. En un caso sometido a juicio, las autoridades encontraron suficiente evidencia para acusar por trata sexual.

La falta de recursos humanos y materiales adecuados limitó la eficacia de los investigadores y fiscales. Las autoridades cooperaron en las investigaciones de trata con funcionarios de Belice, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Estados Unidos. El gobierno, incluida la CICESCT, proporcionó capacitación contra la trata, a los comités locales contra la trata; el sistema de justicia, la inmigración, el trabajo y los funcionarios de salud, ONGs, y las empresas. La policía y los fiscales también recibieron capacitación sobre la investigación y enjuiciamiento del crimen organizado, incluida la trata de personas, de un gobierno extranjero. ONGs financiadas por donantes internacionales impartieron capacitación contra la trata a estudiantes, padres, maestros, comunidades eclesíásticas, grupos de mujeres, periodistas y funcionarios locales, a menudo con el apoyo de la comisión gubernamental contra la trata.

PROTECCIÓN

El gobierno aumentó los esfuerzos para identificar, referir y ayudar a las víctimas de la trata sexual; sin embargo, las autoridades siguen dependiendo en gran medida de las ONG para financiar y prestar servicios. El "equipo de respuesta inmediata" de la CICESCT utiliza protocolos para identificar y referir a las víctimas de trata sexual, pero las autoridades hondureñas carecían de procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de trabajo forzoso. El equipo de respuesta inmediata, que incluyó un coordinador de tiempo completo y un psicólogo capacitado, trabajó con los ministerios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para coordinar los servicios para las víctimas inmediatas -incluyendo comida, refugio y exámenes de salud- y referencias para servicios de apoyo a largo plazo. Funcionó una línea telefónica dedicada para reportar casos de trata, que examinó a 80 personas y respondió a más de 60 llamadas. El gobierno identificó a 111 víctimas, proporcionó apoyo

inmediato a 93 víctimas (entre ellas 73 hondureños y 20 extranjeros en Honduras y 18 víctimas hondureñas en México, Belice y Guatemala) y prestó apoyo a largo plazo a 39 víctimas. Los comités locales de lucha contra la trata, proporcionaron apoyo a largo plazo a cinco víctimas, ayudándoles a abrir pequeñas empresas. El gobierno identificó a víctimas LGBTI en 2016. Las ONG identificaron y asistieron a 40 víctimas en 2016. El gobierno y las ONG asistieron a 48 víctimas identificadas en años anteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores atendió a 18 ciudadanos hondureños víctimas de trata sexual y laboral a través de sus misiones diplomáticas en Belice, Guatemala y México; estas víctimas incluyeron a dos mujeres y un niño, mientras que la edad y el género de los otros no fueron divulgados. De las 111 víctimas identificadas en el país y de 19 víctimas hondureñas identificadas en el exterior, 94 se reunieron con sus familias y recibieron un apoyo limitado a largo plazo, 22 permanecieron en refugios, una víctima extranjera fue repatriada y 13 víctimas hondureñas permanecieron en otros países. Oficiales consulares hondureños en México ayudaron a 13 víctimas hondureñas a obtener visas humanitarias para permanecer en México. El gobierno proporcionó asistencia de repatriación a cinco víctimas hondureñas.

Había servicios limitados disponibles para las víctimas adultas, y los servicios para adultos y menores fuera de la capital eran aún más limitados. Los donantes internacionales y las ONG continuaron financiando y proporcionando la mayoría de los servicios a las víctimas. En 2015, el gobierno creó un nuevo mecanismo para proporcionar a las víctimas de la trata, un mayor acceso a los servicios sociales existentes, aunque el impacto de esta iniciativa aún no estaba claro. El gobierno continuó proporcionando una pequeña donación de 371.460 lempiras (\$ 15.870) a una ONG que operaba el único refugio especializado del país para niñas víctimas de abuso sexual y trata sexual. Las víctimas adultas se colocaban típicamente en refugios para las víctimas de varias formas de abuso; tales refugios carecían de la capacidad y de los recursos especializados necesarios para prestar atención adecuada a las víctimas de la trata. Los servicios de apoyo y reintegración a largo plazo de las víctimas aumentaron, aunque todavía eran limitados, la mayoría de los cuales seguían siendo vulnerables a la trata. Las autoridades hicieron esfuerzos para detectar indicadores de trata, entre el gran número de hondureños que regresaron del extranjero, incluidos menores migrantes no acompañados. El gobierno alentó a las víctimas a colaborar con las investigaciones y los enjuiciamientos, pero la falta de programas adecuados de protección de víctimas y testigos, exacerbado por un lento proceso de juicio y el temor de represalias por parte de los tratantes, llevó a algunas víctimas - particularmente adultos o aquellos que fueron víctimas de grupos criminales- a negarse a cooperar. No se ha informado de que las víctimas identificadas hayan sido sancionadas por actos ilícitos cometidos como consecuencia de haber sido objeto de trata de personas. Sin embargo, los funcionarios reconocieron que muchos menores obligados a participar en actividades ilegales por grupos delictivos no fueron identificados apropiadamente, y por lo tanto pueden haber sido tratados como delincuentes en lugar de víctimas. Las organizaciones no gubernamentales señalaron que el sistema de justicia penal a veces victimiza a las víctimas tanto menores como adultos, debido a la falta de sensibilidad de algunos funcionarios, la falta de servicios de protección y a las restricciones de circulación impuestas a las víctimas adultas. El gobierno permitió que algunas víctimas infantiles proporcionaran testimonios a través de entrevistas pregrabadas, pero el equipo necesario no siempre fue operativo. La ley hondureña permite a las víctimas extranjeras recibir residencia temporal o permanente, incluida la autorización para trabajar; el gobierno no informó que alguna víctima recibió tales beneficios en 2016.

PREVENCIÓN

El gobierno mantuvo sus esfuerzos de prevención. El gobierno proporcionó a CICESCT un presupuesto de 2.2 millones de Lempiras (96,140 dólares), pero los funcionarios informaron que estos fondos eran insuficientes para que CICESCT cumpliera su mandato. La CICESCT siguió trabajando con una red de 19 comités interinstitucionales de lucha contra la trata de personas. Con la financiación del gobierno y de los donantes, las autoridades organizaron y participaron en actividades para hacer conciencia sobre los peligros de la trata, incluso a través de la televisión, la radio y materiales impresos. El gobierno proporcionó capacitación y materiales a los miembros de los comités interinstitucionales locales y realizó sesiones de sensibilización en escuelas y otras instituciones públicas. CICESCT aprobó el plan de acción nacional 2016-2022 para guiar las actividades del gobierno contra la trata de personas, que redactó en consulta con las partes interesadas a principios de 2016. Aunque el gobierno emitió un decreto en 2015 que obligaba a las empresas de colocación a cobrar honorarios a los empleadores y no a los empleados, no proporcionó información sobre sus esfuerzos para hacer cumplir estos requisitos. Las autoridades llevaron a cabo campañas para aumentar la concienciación sobre el turismo sexual infantil, entre los miembros del sector turístico y los funcionarios locales, pero no informaron haber condenado a ninguna persona por comprar actos sexuales de víctimas de trata, en comparación con tres condenas del 2015. El gobierno no hizo esfuerzos para reducir la demanda de mano de obra forzada, pero exigía que los negocios enfocados en el turismo firmaran un código de conducta para reducir la trata y sancionar los negocios que facilitan la explotación. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata a su personal diplomático.

PERFIL DE LA TRATA

Como se informó en los últimos cinco años, Honduras es principalmente una fuente y un país de tránsito para hombres, mujeres y menores sometidos a la trata sexual y al trabajo forzoso; en menor medida, es un destino para mujeres y niñas de países vecinos sometidos a la trata sexual. Las mujeres y los menores hondureños son explotados en la trata sexual dentro del país y en otros países de la región, particularmente en México, Guatemala, El Salvador, Belice y Estados Unidos. Los hondureños LGBTI son particularmente vulnerables a la trata sexual. Los hombres, mujeres y menores hondureños son sometidos a trabajos forzados en la venta ambulante, el servicio doméstico y el sector informal en su propio país y el trabajo forzoso en otros países, particularmente en Guatemala, México y Estados Unidos. Los menores de las comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular los niños/niñas miskitos, son vulnerables al trabajo forzoso, incluso en los buques pesqueros; los menores que viven en las calles son vulnerables a la trata sexual y laboral. Las organizaciones criminales, incluidas las pandillas, explotan a las niñas para la trata sexual, obligan a los niños a la mendicidad callejera y coaccionan y amenazan a los jóvenes varones para transportar drogas, cometer extorsión o cometer actos de violencia, incluido el asesinato; esto ocurre principalmente en áreas urbanas, pero una ONG reportó un aumento en la actividad de pandillas en áreas rurales. Durante el año se continuó con la denuncia de menores sometidos a trata sexual en las calles de las grandes ciudades, en particular la capital económica del país, San Pedro Sula, bajo el disfraz de mendicidad o venta ambulante. Honduras es un destino para los que realizan turismo sexual infantil, provenientes de Canadá y los Estados Unidos. Algunos emigrantes hondureños en los Estados Unidos son sometidos a trabajos forzados, actividades

criminales forzadas o trata sexual en el camino o a su llegada. Los migrantes latinoamericanos transitan por Honduras hacia el norte de América Central y América del Norte, donde algunos son explotados para la trata sexual y el trabajo forzoso. Durante el año, hubo una investigación por parte de las autoridades sobre un informe de víctimas de trata sexual de menores, que fueron llevados a las cárceles y explotados por prisioneros, lo que generó preocupación por la posible complicidad de las autoridades penitenciarias. La corrupción en general seguía siendo un reto para los esfuerzos de aplicación de la ley. Los fiscales informaron que algunos policías locales proporcionaron protección a los propietarios de burdeles o les informaron acerca de incursiones inminentes, y funcionarios de seguridad han participado en la trata sexual infantil.